

**Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Resolución
525/2013 de 15 Nov. 2013, Rec. 710/2013**

Nº de Resolución: 525/2013

Nº de Recurso: 710/2013

Recurso nº 710/2013 C.A. Castilla-La Mancha 127/2013

Resolución nº 525/2013

En Madrid, a 15 de noviembre de 2013.

VISTO el recurso interpuesto por D.^a Emilia, Secretaria General de la Federación de Servicios Privados de CC.OO. en Castilla-La Mancha, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo de fecha 19 de septiembre de 2013 por la que se resuelve la adjudicación del contrato de "Servicio de limpieza de edificios municipales en el término de Cabanillas del Campo", el Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO.

Primero. El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo (Guadalajara) convocó, mediante anuncio publicado en el DOUE, en el BOE de 1 de julio de 2013, en el BOP de Guadalajara de 26 de junio de 2013 y en el Perfil de contratante del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo el 20 de junio de 2013, el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la adjudicación del contrato "Servicio de limpieza de edificios municipales en el término municipal de Cabanillas del Campo" (número de expediente: XXXXX).

Segundo. Tramitado el procedimiento administrativo de contratación de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (LA LEY 21158/2011) por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP) y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (LA LEY 1470/2001), en fecha 19 de septiembre de 2013 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo acuerda la adjudicación del contrato a favor de la empresa LIMPIEZAS DEL NOROESTE S.A.U. (LINORSA).

Tercero. Mediante escrito de fecha 14 de octubre de 2013, presentado ante la Subdelegación del Gobierno de Guadalajara el 16 de octubre y con entrada en el registro del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo el 21 de octubre, D^a. Emilia, Secretaria General de la

Federación de Servicios Privados de CC.OO. en Castilla-La Mancha interpone recurso especial en materia de contratación contra el acuerdo de adjudicación de 19 de septiembre de 2013 adoptado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo.

Cuarto. La Secretaría del Tribunal, el 7 de noviembre de 2013, dio traslado del recurso interpuesto a los restantes licitadores, otorgándoles un plazo de cinco días hábiles para que, si lo estimaran oportuno, formularan las alegaciones que a su derecho conviniesen, sin que ninguno de ellos haya evacuado el trámite conferido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Primero. Antes de entrar en el análisis de los restantes requisitos del recurso es preciso examinar si concurre o no en la recurrente la legitimación activa para impugnar la adjudicación de un contrato, para lo cual debe partirse de lo dispuesto en el artículo 42 del TRLCSP (LA LEY 21158/2011), según el cual *"Podrá interponer el correspondiente recurso especial en materia de contratación toda persona física o jurídica cuyos derechos e intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto del recurso"*. Dicho precepto debe interpretarse a la luz de la doctrina sentada por los Tribunales, siendo así necesario acudir a la Jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 183/2009, de 7 de septiembre, en el Recurso de amparo 4485/2005 promovido por una Organización Sindical, impugnando el acuerdo de adjudicación de un contrato administrativo convocado mediante concurso, contra Sentencia de 17 de mayo de 2005, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

Esta Sentencia, en los fundamentos jurídicos en relación con la legitimación de los Sindicatos para ejercer acciones en el orden contencioso-administrativo, invoca numerosos pronunciamientos del propio Tribunal (SSTC 358/2006, de 18 de diciembre (LA LEY 160303/2006); 153/2007, de 18 de junio (LA LEY 53195/2007); 2002/2007, de 24 de febrero; 4/2009 (LA LEY 567/2009), de 12 de enero) que han ido conformando jurisprudencia consolidada que se resume en que *"es posible, en principio, reconocer legitimado al sindicato para accionar en cualquier proceso en el que estén en juego intereses colectivos de los trabajadores"* pero añade *"también venimos exigiendo que esta genérica legitimación abstracta o general de los sindicatos tenga una proyección particular sobre el objeto de los recursos que entablen ante los Tribunales mediante un vínculo o conexión entre la organización que acciona y la pretensión ejercitada"*.

Distingue, por tanto, entre una primera legitimación abstracta o general de los sindicatos y una exigencia adicional relativa a la concurrencia de conexión entre la organización que recurre y la pretensión ejercitada.

El Tribunal, en el fundamento jurídico 5 de esta Sentencia, recoge las palabras del Tribunal Supremo en la Sentencia dictada en el recurso de casación, donde dice que el recurrente no justificó la existencia de un vínculo especial y concreto entre el sindicato y el objeto procesal, puesto que éste no consistía propiamente en la anulación de la convocatoria del contrato, sino *"la resolución por la que se adjudica determinado contrato de asistencia técnica, por lo que los intereses que están en juego en dicha actuación administrativa se reducen a la determinación de la empresa participante en el concurso que ha de resultar adjudicataria, en aplicación de las normas que regulan dicha contratación, sin que sea objeto de tal actividad la decisión de convocatoria del contrato, su procedencia y efectos que responden a una actuación anterior, que no es objeto del proceso"*.

El Tribunal señala, igualmente, que la organización sindical no acredita que con la anulación de la adjudicación del contrato, vaya a obtener un beneficio o la desaparición de un perjuicio; no se había impugnado la convocatoria del contrato, sino la adjudicación a una determinada empresa, y con la anulación de tal adjudicación no obtendría un beneficio dicha

organización sindical ni los empleados municipales, sino que la ventaja, en su caso, sería a favor de las empresas que participaron en el concurso y no resultaron adjudicatarias que tendrían una nueva oportunidad.

Segundo. En el recurso que se interpone ante este Tribunal, contra la adjudicación por el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo del contrato para el "Servicio de limpieza de edificios municipales en el término municipal de Cabanillas del Campo", no cabe otra interpretación que la sustentada por los Tribunales en la jurisprudencia antes citada ya que la parte recurrente no ha impugnado la convocatoria ni los pliegos sino la adjudicación del contrato y, en caso de estimarse, produciría perjuicio al adjudicatario sin que se obtuviese beneficio para la recurrente.

En su virtud, este Tribunal considera que la parte recurrente no se encuentra legitimada para interponer recurso contra la adjudicación del contrato.

Por todo lo anterior,

VISTOS los preceptos legales de aplicación,

ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha,

ACUERDA:

Primero. Inadmitir, por falta de legitimación, el recurso interpuesto por D.^a Emilia, Secretaria General de la Federación de Servicios Privados de CC.OO. en Castilla-La Mancha, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo de fecha 19 de septiembre de 2013 por la que se resuelve la adjudicación del contrato de "Servicio de limpieza de edificios municipales en el término de Cabanillas del Campo".

Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento de contratación, acordada en virtud de lo dispuesto en el artículo 45 del TRLCSP (LA LEY 21158/2011).

Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP (LA LEY 21158/2011).

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1 (LA LEY 2689/1998) k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LA LEY 2689/1998).